“El suscrito Diputado GUILLERMO TOSCANO REYES, así como los demás Diputados que integramos el Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional de esta Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22, fracción I; 83, fracción I; 84 fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 122, 123, 124 y 126 de su Reglamento; sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una Iniciativa de Punto de Acuerdo; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Colima y el país mismo, atraviesan por un periodo de transición y consolidación al Sistema Anticorrupción, el cual ha sido necesaria su implementación con motivo de los actos de corrupción que han calado fuerte en la sociedad, llevándonos al límite de no creer en los servidores públicos y en las instituciones.

La corrupción ha alcanzado altos niveles de penetración en los sistemas gubernamentales, hasta ser considerada un cáncer social; la cual lastima los intereses de la sociedad y no permite que el desarrollo y el bienestar social se potencialicen.

En Colima, se ha venido integrando y consolidando el Sistema Estatal Anticorrupción, con normas que deben converger en un espacio y tiempo determinado, pero que por decisiones de unos cuantos se fueron aprobando de manera escalonada, y al parecer, sin la planeación e importancia que merece este Sistema, provocando que su consolidación en el Estado sea de los últimos a nivel nacional.

Es tiempo de que actuemos con firmeza y determinación hacia la consolidación de las instituciones que verdaderamente salvaguarden los intereses de la sociedad; es tiempo de forjar nuevas costumbres y formas de pensar, enfocadas a buscar el bienestar de la sociedad, sobre los intereses de unos cuantos.

Como lo dije, el Sistema Estatal Anticorrupción ha venido creándose a pasos lentos, sin una articulación que le de fortaleza en su funcionamiento e implementación. Lo digo así, porque la omisión legislativa oportuna, quiero pensar, provocó que no se presupuestara correctamente para los nuevos órganos que se han creado como es el Comité de Participación Ciudadana, el Comité Coordinador, integrado por el Presidente del Comité de Participación Ciudadana, el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, el Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, la Contraloría General del Estado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el OSAFIG y el INFOCOL; siete instituciones que junto con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción y los órganos internos de control, forman el Sistema Estatal Anticorrupción; Sistema que habrá de combatir la corrupción, mejorar la gestión pública, la transparencia y la rendición de cuentas.

Como se advierte, en su mayoría son órganos autónomos, a excepción de la Contraloría General que depende del Gobernador, y en el caso de la Fiscalía Especializada, que orgánicamente depende la Fiscalía General del Estado, aunque ésta última, cuenta con autonomía constitucional; el resto de las instituciones tienen el carácter de órganos constitucionalmente autónomos; los cuales, para el correcto ejercicio de sus atribuciones deben contar con un patrimonio propio y administrar libremente su presupuesto en términos de las disposiciones legales vigentes.

Como se advierte, estas instancias al ser nuevas no cuentan con una infraestructura propia, y algunas aún están siendo conformadas, como es el caso de la Secretaría Ejecutiva y la Fiscalía Especializada; asimismo, cabe mencionar que el Tribunal de Justicia Administrativa y el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, no cuentan con instalaciones propias teniendo que acudir al arrendamiento, lo cual representa un gasto innecesario que bien podría redirigirse a otras actividades en favor de la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.

Lo anterior hace evidente la necesidad de trabajar en un proyecto en el que estas Instituciones del sector público, que son responsables de luchar en contra de la corrupción, cuenten con la infraestructura necesaria para cumplir con sus objetivos.

Por ello, contar con un Complejo Administrativo Anticorrupción habrá de garantizar que las instituciones integrantes del Sistema Anticorrupción, cuenten con instalaciones dignas para el desempeño de su labor, pues se ha demostrado que mientras mejor sean las condiciones de trabajo, mejores serán los resultados de las instituciones, y más cuando éstas contribuyen a la transparencia, rendición de cuentas y combate a los actos de corrupción.

Así, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del Sistema planteado es que se propone que el Ejecutivo del Estado trabaje en un proyecto de inversión para crear un Complejo Administrativo Anticorrupción; el cual podrá llevarse a cabo en la reserva territorial que se piensa adquirir con los 200 millones de los 410 millones autorizados por la Legislatura anterior, relativos a los terrenos que actualmente ocupan la 20va Zona Militar.

Reservas en las que se podrán albergar el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, la Contraloría General del Estado, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, instancias que como se ha mencionado no cuentan con instalaciones propias; en un caso similar, se encuentra la Secretaría Ejecutiva, quien será la instancia de apoyo del Comité Coordinador en el Sistema Anticorrupción y que tendrá que ser creada como un organismo con patrimonio propio. Por ello, al contemplar a estas instituciones para que residan en el Complejo Anticorrupción, se estaría ahorrando en la construcción de una sola dependencia, para que la inversión sea en un solo complejo que beneficie a la mayoría de las instituciones con labores primordiales en el combate a la corrupción.

Esta medida trae como beneficios que todas las instancias del Sistema se encuentren concentradas y al alcance de toda la sociedad, que no se encuentren dispersas en colonias o avenidas de la capital del Estado; para que sean la herramienta que la gente necesita para denunciar los actos y hechos de corrupción, con el firme propósito de inhibir la corrupción, y que la sociedad recobre la confianza en las instituciones y sus servidores públicos. Asimismo, habrá de permitir importantes ahorros en rentas de inmuebles como se hace actualmente con la mayoría de ellos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado ante esta Soberanía, se propone el siguiente proyecto de Iniciativa de

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se hace un atento exhorto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, para que gire las instrucciones necesarias y lleve a cabo un proyecto ejecutivo mediante el cual, se instrumente la creación de un *Complejo Administrativo Anticorrupción* con recursos provenientes del crédito de 410 millones pesos, autorizado por la Quincuagésima Octava Legislatura.

SEGUNDO.- Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, con el objeto de que en el proyecto ejecutivo del *Complejo Administrativo Anticorrupción* coexistan parte de las instituciones que conforman el Sistema Estatal Anticorrupción, como son: Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, Tribunal de Justicia Administrativa, la Contraloría General del Estado, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

TERCERO.- Comuníquese el presente, a la autoridad exhortada para los efectos administrativos correspondientes.

Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 126 de su Reglamento, solicitamos que la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su presentación.

ATENTAMENTE

POR EL PARDIO DEL MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL,
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MISMA BANCADA.